

SERIES ANÁLISIS JURÍDICOS

Núm. 1 - Mayo 2014

LA REFORMA DE LA LEY DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA: NO AVANZAMOS

Alicia Moreno Pérez

Directora de Litigio de RIS



Resumen Ejecutivo

El Consejo de Ministros del pasado 21 de febrero acordó remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que sustituye a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996. El Proyecto de ley tiene como beneficiarios, de un lado, a quienes no tienen recursos suficientes para litigar y, de otro, a determinadas víctimas y asociaciones o colectivos, con independencia de su nivel de renta.

Muchas críticas se han alzado sobre el contenido del Proyecto de Ley en distintos aspectos. Por nuestra parte, abordamos aquí de un lado, el alcance en materia de asistencia jurídica penal a la luz de la perspectiva europea y, de otro, algunas de las deficiencias que presenta el Proyecto desde un marco jurídico de derechos humanos: los actuales umbrales y exigencias para acceder al derecho de asistencia jurídica gratuita se elevan con lo que menos personas verán reconocida su insuficiencia de recursos; el tratamiento de víctimas con acceso a justicia gratuita que se incluye es desigual y arbitrario; también se dificulta y pone trabas a los abogados en el desempeño del servicio.

ACCESO
A LA
JUSTICIA

rights
international
spain

defendiendo los derechos y libertades civiles

www.rightsinternationalspain.org

Introducción

Una especial e importante orientación y guía se puede extraer de la Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU relativa a los Principios sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal: ***“La asistencia jurídica es un elemento esencial de un sistema de justicia penal justo, humano y eficiente que se base en la primacía del derecho. La asistencia jurídica es el fundamento para el disfrute de otros derechos, como el derecho a un juicio justo, definido en el artículo 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es una condición previa para el ejercicio de esos derechos, así como una salvaguardia importante que asegura la equidad fundamental y la confianza pública en el proceso de justicia penal”***¹.

En el ámbito de la Unión Europea, la propuesta de Directiva relativa a la asistencia jurídica provisional para las personas sospechosas y acusadas privadas de libertad así como en casos de procesos de orden de arresto europea está estrechamente vinculada con, y tiene como fin garantizar la efectividad de, la Directiva de Acceso a un abogado. El legislador español debe tener en cuenta esta perspectiva comunitaria para ajustarse mejor a las pautas europeas que se vienen marcando.

De otra parte, la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados recuerda que el ***“objetivo es alentar a los Estados a diseñar y poner en marcha sistemas de prestación de asistencia jurídica que sean eficaces y sostenibles y permitan a las personas ejercer y disfrutar de una serie de derechos humanos, entre ellos el derecho a un juicio imparcial y a un recurso efectivo. (...) La asistencia jurídica debe estar asegurada tanto en las causas penales, como en las demás, y debe abarcar todas las fases del proceso judicial o extrajudicial, lo cual contribuiría a eliminar obstáculos al acceso a la justicia, pues se prestaría asistencia a personas que de otro modo no podrían ni costearse un abogado que las defiendan o represente ni acceder a la justicia”***².

Al respecto, sostenemos que el Proyecto de Ley quita más que pone en cuanto a las posibilidades de acceso a la justicia gratuita porque menos personas podrán beneficiarse de ella, y



Esta obra está publicada bajo una Licencia Creative Commons Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional. Para más información sobre la licencia puede consultar el siguiente link: <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>.

¹ Asamblea General de las Naciones Unidas, 3 de octubre de 2012. Sexagésimo séptimo período de sesiones, Tercera Comisión, Tema 103 del programa: Prevención del delito y justicia penal. Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal. Anexo A.1 y A.2: ***“Además, en el artículo 14, párrafo 3 d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se dispone que toda persona tendrá derecho, entre otras cosas, “a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviere defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo”***. DOC EC/N.15

² Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul. Consejo de Derechos Humanos, 23º período de sesiones. Tema 3 de la agenda. Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo, DOC A/HRC/23/43, de 15 de marzo de 2013.

trae más dificultades y más burocracia para los obligados a prestar el servicio, los abogados, lo que afectará a la eficacia y prontitud de la prestación.

1. La hoja de ruta de la Unión Europea en materia de justicia penal. El Proyecto de Ley en relación con la propuesta de Directiva de asistencia jurídica provisional en los procesos penales.

El reconocimiento mutuo de resoluciones se basa en la confianza en los sistemas de justicia penales de los Estados miembros la Unión Europea (en adelante, la UE) que depende de una serie de factores. Estamos, por tanto, en un momento de acercamiento de legislaciones de los Estados Miembros de la UE con el objeto precisamente de fortalecer dicha confianza y facilitar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de decisiones penales. Dentro *del Programa de Estocolmo* sobre libertad, seguridad y justicia en la UE³, se encuentra un *Plan de trabajo* que establece las prioridades de la UE en el área de derechos y garantías procesales⁴, que a su vez contiene seis medidas, una de ellas relativa a la asistencia jurídica (Medida C2)⁵. Dicha medida se concentra en el asesoramiento jurídico y la justicia gratuita partiendo de la premisa de que para el sospechoso o acusado en el marco de un proceso judicial, el derecho a asesoramiento jurídico (a través de un abogado) en la fase adecuada más temprana del proceso es fundamental para preservar la equidad del mismo. Por tanto, el derecho a asistencia jurídica gratuita debe garantizar el ejercicio efectivo de dicho derecho al asesoramiento jurídico.

La UE ha podido constatar que las disposiciones que regulan la asistencia jurídica en los distintos Estados Miembros varían enormemente tanto en lo relativo a su ámbito de aplicación personal como en los momentos en los que procede la asistencia pues algunos la prevén, en el ámbito penal, durante la fase de instrucción (asistencia en dependencias policiales, y antes de la imputación judicial) y otros sólo la extienden a la fase de juicio. También hay variaciones sobre el momento en que se considera exigible en los casos de orden de arresto y entrega europea.

De otro lado, algunos estados pagan directamente a los abogados por las horas de servicio prestado (normalmente con un máximo de horas por caso), en algunos sistemas se paga un máximo por caso (supuesto español), que puede ser muy bajo (supuesto español) siendo que no proporcionar una remuneración adecuada a los profesionales puede originar un desincentivo para prestar este servicio. Algunos estados dan presupuesto directo a los colegios de abogados que luego estos administran. Los estados emplean, en definitiva, diferentes modelos para prestar asistencia jurídica. Pueden recurrir, por ejemplo, a defensores públicos, abogados privados,

³ Programa de Estocolmo - Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano (2010/C 115/01), disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:ES:PDF>.

⁴ En 2009 el Consejo de la UE adoptó una resolución sobre un *plan de trabajo para reforzar los derechos procesales* con el objeto de crear unas normas mínimas comunes relativas a derechos procesales en la UE. En 2010, este *plan de trabajo* pasó a formar parte del *Programa de Estocolmo* para los años 2010-2014.

⁵ Las otras cinco prioridades son: Medida A – El derecho a interpretación e introducción en los procesos penales (Directiva 2010/64/UE de 20 de octubre de 2010); Medida B – Derecho a información en los procesos penales (Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012); Medida C1 – Acceso a un abogado en procesos penales (Directiva 2013/47/UE, de 22 de octubre de 2013); Medida E – Salvaguardas para especiales para sospechosos o acusados vulnerables (propuesta de Directiva relativa a menores de 2013 http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/com_2013_822_en.pdf) y Medida F - Detención provisional.

abogados contratados, proveedores de servicios gratuitos, colegios de abogados o personal parajurídico.

Dadas las diferencias significativas entre los distintos sistemas se ha llegado, pues, a una propuesta de Directiva cuyo objetivo es fijar estándares mínimos comunes sobre el derecho a asistencia jurídica provisional para sospechosos o personas acusadas en procesos penales cuando están privadas de libertad y para aquéllas sujetas a procesos de orden de arresto europea⁶. Esta propuesta de Directiva está estrechamente ligada con y complementa la Directiva de acceso a un abogado y se presenta junto con una Recomendación de la Comisión UE sobre el derecho de sospechosos y personas acusadas en procesos penales a asistencia jurídica⁷⁸. La Recomendación busca fomentar la convergencia en relación a la evaluación de los criterios o condiciones de elegibilidad para obtener la asistencia jurídica en los Estados Miembros, así como alentarles a la acción en orden a mejorar la calidad y efectividad de los servicios y la administración de la asistencia jurídica. El acceso efectivo a asistencia jurídica es esencial para asegurar el respeto a la presunción de inocencia y los derechos de defensa.

El objetivo de la propuesta de Directiva⁹ es el de garantizar que los sospechosos y personas acusadas en procesos penales que están privadas de libertad y aquéllas sujetas a procesos en contexto de una orden de arresto europea tengan acceso a asistencia jurídica para hacer efectivo su derecho de acceso a un abogado, tal y como prevé la Directiva de Acceso a un Abogado.

La propuesta de Directiva ampara¹⁰ a los sospechosos y personas acusadas que están privadas de libertad. La asistencia jurídica debe ser garantizada, sin demoras indebidas, desde la privación de libertad (desde que son llevadas detenidas a la comisaría y antes de cualquier interrogatorio¹¹). La propuesta de Directiva también se aplica a personas reclamadas por una orden de arresto europea, desde el arresto hasta la entrega o, en caso de no entrega, hasta que haya una decisión final.

Propuesta de Directiva de asistencia jurídica provisional para sospechosos y personas acusadas privadas de libertad:

- *La asistencia jurídica gratuita debe ser garantizada sin demoras indebidas.*
- *Desde la privación de libertad.*
- *Antes de cualquier interrogatorio.*

El Proyecto de Ley no lo prevé.

⁶ El 28 de noviembre de 2013, la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de Directiva sobre asistencia jurídica provisional a los sospechosos o personas acusadas privadas de libertad así como en casos de procesos de orden de arresto europea, disponible en <http://www.ejusticia.net/images/uploads/pdf/legal-aid-2013-11-27-824-com-proposal.pdf>.

⁷ Disponible en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0824:FIN:EN:PDF>.

⁸ El 28 de noviembre de 2013, la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de Directiva sobre asistencia jurídica provisional a los sospechosos o personas acusadas privadas de libertad así como en casos de procesos de orden de arresto europea, disponible en <http://www.ejusticia.net/images/uploads/pdf/legal-aid-2013-11-27-824-com-proposal.pdf>.

⁹ Artículo 1.

¹⁰ Artículo 2.

¹¹ Atendiendo a los períodos previos a que se formule la acusación formal, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos bajo el artículo 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La asistencia jurídica se define como la financiación y asistencia por parte de los Estados Miembros para asegurar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a un abogado. Debe cubrir los costes de la defensa tales como los honorarios del abogado y otros gastos del procesos así como las costas judiciales¹². La asistencia jurídica provisional significa la obligación de proporcionar asistencia jurídica a una persona privada de libertad hasta que se tome la decisión de si puede beneficiarse de asistencia jurídica gratuita¹³. Es decir, de conformidad con la propuesta de Directiva, se proporcionará asistencia jurídica de forma preliminar o provisional, sin demora, desde la privación de libertad y en cualquier caso antes de cualquier interrogatorio¹⁴. Y ello, porque en las primeras fases de los procesos, sospechosos y personas acusadas son particularmente vulnerables y el acceso a un abogado es de vital importancia para proteger los derechos de un juicio justo, sobre todo el derecho a no inculparse.

Para que estas personas, que se encuentran privadas de libertad, puedan ejercer de forma efectiva el derecho de acceso a un abogado desde las primeras fases del proceso, no deberían esperar para acceder a un abogado el tiempo durante el que se procesa la solicitud de asistencia jurídica y se evalúan los criterios de elegibilidad, que podría prolongarse en el tiempo. Por tanto, los Estados miembros deben garantizar el acceso a asistencia jurídica provisional sin demoras desde la privación de libertad y antes de que proceda al interrogatorio.

Esto último es importante y al respecto el Proyecto de Ley debería incluir expresamente esa previsión en su articulado. El Proyecto asegura la *“asistencia de Abogado al detenido, preso o imputado que no lo hubiera designado, para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional (...)”*; es decir, sólo para la práctica de diligencias policiales (interrogatorio) lo que excluye la posibilidad de asesoramiento previo y de entrevista reservada antes de la toma de declaración como ahora mismo sucede en la práctica vigente¹⁵. A la luz del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (derechos del detenido) sólo se habilita la entrevista reservada entre abogado y detenido después de su toma de declaración en sede policial luego el abogado no puede prestar asesoramiento antes del interrogatorio. En consecuencia, el **mecanismo que prevé el Proyecto de Ley obstaculizaría ese derecho al que apela la propuesta de Directiva.**

Esta notable deficiencia deberá ser corregida por el legislador no sólo porque a ello apunta la propuesta de Directiva que estamos viendo sino porque la asistencia jurídica con carácter previa al interrogatorio está recogida expresamente en el artículo 3 de la Directiva sobre el derecho de

¹² Artículo 3(a). Ver también, párrafo 8, Introducción, de los Principios y Directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica, *doc. cit.*

¹³ Artículo 4(3). Es decir, la asistencia jurídica provisional termina cuando se toma dicha decisión y sea efectiva. En caso de una decisión positiva, hasta que se haya designado un abogado de justicia gratuita.

¹⁴ Artículos 4(2) y 5. Ver también Directriz 1, a) a e) de Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal, *doc. cit.*

¹⁵ Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el asunto *Berlinski c. Polonia*, el derecho a asistencia jurídica cubre ciertos actos de investigación como exámenes médicos e interrogatorios: “dado que un número de actos procesales, incluidos los interrogatorios de los demandantes y los exámenes médicos fueron llevados a cabo (...)” no había “ninguna justificación para tal restricción que privó a los demandantes del derecho a defenderse de forma adecuada durante las fases de investigación y juicio oral” (Demandas 27715/95 y 30209/96), sentencia de 20 de junio de 2002, párr. 77.

acceso a un abogado en los procesos penales¹⁶, aprobada el 22 de octubre de 2013 y cuyo plazo de transposición al ordenamiento jurídico nacional expira el 27 de noviembre de 2016¹⁷. Por ello, el Proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita debe asegurar que la asistencia de abogado se asegurará desde el momento mismo de la detención y antes de cualquier interrogatorio.

La asistencia jurídica provisional debe garantizarse hasta que la autoridad competente haya tomado una decisión final acerca de si tales personas pueden beneficiarse de la asistencia jurídica. En caso de denegación, el derecho de asistencia jurídica provisional dura hasta que se hayan agotado los recursos para revisar tal decisión o, en caso afirmativo, hasta que se nombra un abogado de justicia gratuita. Los Estados Miembros deben asegurar que no se produce un vacío en el que el sospechoso o persona acusada privada de libertad no esté debidamente representada. Los Estados podrán prever la recuperación de costes si tras la decisión final la persona no puede beneficiarse¹⁸.

El Proyecto de Ley dice que *“no será necesario que el detenido, preso o imputado acredite previamente carecer de recursos”*, es decir, la asistencia letrada se prestará en todo caso. Sin embargo, a continuación, se añade *“sin perjuicio de que si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, éste deberá abonar al Abogado los honorarios devengados por su intervención”*. Ello se traduce en que si finalmente no se concede la justicia gratuita el abogado que ha prestado el servicio no recibirá prestación a cargo del erario público y se verá obligado a luchar ante el cliente por el cobro de sus honorarios, lo que muy probablemente no consiga, con lo que finalmente no percibiría pago alguno por los servicios prestados. **El Estado debe garantizar que quien ha prestado un servicio público, en virtud de una designación por el turno de oficio, perciba en todo caso el pago de sus honorarios**, con independencia de que el Estado intente repercutir los costes frente a la persona a quien se deniegue finalmente la justicia gratuita. Así pues, la formulación correcta a la luz de la propuesta de Directiva sería la contraria: el Estado asegura la asistencia gratuita, asumiendo el coste, y a él corresponde prever los mecanismos para su recuperación si finalmente la gratuidad es denegada.

El Proyecto de Ley:

- *Debe garantizar que el letrado que ha prestado la asistencia perciba sus honorarios a cargo del Estado.*
- *Debe ser el Estado quien repercuta los costes de la asistencia, si la gratuidad es finalmente denegada.*

¹⁶ Disponible en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:294:0001:0012:ES:PDF>.

¹⁷ A su tenor, los Estados Miembros asegurarán la asistencia letrada antes de que el sospechoso o acusado sea interrogado por la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades judiciales y velarán por que el sospechoso o acusado tenga derecho a entrevistarse en privado y a comunicarse con el letrado que lo represente, inclusive con anterioridad a que sea interrogado por la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades judiciales.

¹⁸ Según los Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal, *“los servicios de asistencia jurídica, entre otras cosas, redundan en beneficios financieros y ahorros de costos a lo largo de todo el proceso de justicia penal, los Estados deben, cuando proceda, incluir en sus presupuestos partidas adecuadas y específicas para servicios de asistencia jurídica que sean proporcionadas a sus necesidades y, en particular, establecer mecanismos especiales y sostenibles de financiación del sistema de asistencia jurídica nacional.”* (párr. 60, Directriz 12).

Ciertamente no estamos aún ante una Directiva de obligada implementación, es la propuesta que la Unión Europea está presentando a los Estados miembros, pero puesto que representa una voluntad comunitaria de caminar en esa línea, toda reforma legal interna debe ir en la línea en la que se está avanzando. En este sentido, el Proyecto de Ley debe garantizar de un lado que se presta asistencia jurídica, gratuita, antes de cualquier interrogatorio policial, y, de otro, asegurar que el letrado que ha prestado la asistencia perciba sus honorarios a cargo del Estado y que sea éste quien busque repercutir los costes de la asistencia si la gratuidad es finalmente denegada (sobre el sospechoso o acusado, pero no a expensa del abogado).

2. Valoraciones críticas sobre otros aspectos del Proyecto de Ley.

La justicia gratuita es una materia fundamental como instrumento de acceso a justicia. Todos los organismos, instituciones y colectivos afectados han venido haciendo observaciones y recomendaciones sobre esta reforma legal¹⁹.

Por nuestra parte venimos a valorar algunos aspectos del Proyecto de Ley que nos preocupan por su carácter regresivo, discriminatorio o por los obstáculos que entrañan.

2.1. Más personas a pasar por caja

a. Algunos recordatorios de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos

La Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados ha considerado en un informe monográfico dedicado a la asistencia jurídica que la finalidad de ésta *“es **contribuir a la eliminación de obstáculos y barreras que entorpezcan o restrinjan el acceso a la justicia** mediante la prestación de asistencia a las personas que de otro modo no podrían costearse un abogado ni acceder al sistema judicial y que por consiguiente, la definición del concepto debería ser lo más amplia posible. No solo debería incluir el derecho a la asistencia jurídica gratuita en un proceso penal, según se establece en el artículo 14, párrafo 3 d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino también la **prestación de asistencia jurídica efectiva en cualquier procedimiento judicial o extrajudicial** destinado a determinar derechos u obligaciones”*²⁰.

Asimismo ha recordado que, *“de conformidad con la jurisprudencia de los actuales órganos de tratados de derechos humanos, el concepto de beneficiario de la **asistencia jurídica [gratuita]***

¹⁹ Especialmente críticos han sido el Consejo General de la Abogacía y los colectivos de abogados. Sin ánimo de ser exhaustivos, entre algunos ejemplos: rechazo del Consejo General de la Abogacía al Proyecto de ley <http://www.abogacia.es/2014/04/01/la-abogacia-rechaza-el-proyecto-de-ley-de-justicia-gratuita-por-su-perjuicio-a-ciudadanos-y-abogados-adscritos-al-turno-de-oficio/> ; rechazo del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona http://www.elderecho.com/actualidad/ley_de_asistencia_juridica_gratuita-tasas_judiciales-Abogacia-Catalana-Asistencia-Juridica-Gratuita_0_648375040.html y Comunicado de la Asociación Libre de Abogados (ALA) sobre el Proyecto <http://ala.org.es/nota-de-prensa-ante-el-proyecto-de-ley-de-asistencia-juridica-gratuita/#.Ux2IdDnXjOU.twitter> <http://www.altodo.org> ,

²⁰ Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, *doc cit.*, párr 27.

debería incluir a toda persona que entre en contacto con la ley y carezca de medios para pagar a un abogado. Este concepto incluye también a: a) toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido violados como resultado de un acto u omisión por parte de un agente estatal; y b) toda persona que participe en un proceso judicial o extrajudicial para la determinación de sus derechos u obligaciones "de carácter civil""²¹.

Por su parte, para la Asamblea General de las Naciones Unidas *"cuando los Estados aplican condiciones relativas a los medios de vida de las personas para determinar si tienen derecho a recibir asistencia jurídica, deben asegurarse de que: a) No queden excluidas de la asistencia jurídica personas cuyos medios de vida superen los límites establecidos pero que no puedan sufragar los servicios de un abogado, o no tengan acceso a ellos, en situaciones en que normalmente se prestaría asistencia jurídica o cuando redunde en interés de la justicia prestar esa asistencia; b) Los criterios de aplicación de las condiciones relativas a los medios de vida se den a conocer ampliamente (...)"*²².

b. Qué tenemos en el Proyecto de Ley: regresión en cuanto a sus posibles beneficiarios

Desde esas premisas, encontramos que el Proyecto de Ley trae de entrada una certeza: habrá menos beneficiarios de la justicia gratuita. Más personas tendrán que costearse la asistencia jurídica porque, por un lado, **aunque se suben los umbrales de acceso se perjudica especialmente a los ciudadanos que no integren una unidad familiar**; por otro, porque **sigue sin concretarse qué se entenderá por "patrimonio suficiente"** y no se explica o justifica porque tenerlo, con independencia del nivel de renta, será motivo de denegación.

A tenor del Proyecto de Ley, manteniendo en lo esencial las reglas de la ley vigente, el solicitante de la justicia gratuita tendrá que acreditar la carencia de recursos e ingresos económicos brutos (no netos) con lo que, por ejemplo, aquellos trabajadores –como los autónomos - cuya actividad propia genera gastos se verán discriminados. Tales ingresos, por tanto, serán **computados por todos los conceptos** (salarios, rentas, subsidios, etc.) y por unidad familiar²³, así como la carencia de "patrimonio suficiente".

Esto último es importante. En el actual contexto de precariedad económica, habrá ciudadanos que, más allá de la vivienda habitual –que es lo único que no se considera patrimonio suficiente- dispongan, por ejemplo, de un vehículo y de una segunda vivienda (que a lo mejor, incluso, todavía están pagando mediante hipoteca) pero se encuentran en el paro²⁴, es decir, tienen "patrimonio" pero no tienen dinero; si necesitan asistencia jurídica tendrán que costársela porque se entenderá que tienen patrimonio suficiente. Parece por tanto necesario **exigir mayor concreción sobre la "suficiencia" del patrimonio para evitar situaciones injustas**. El concepto de "patrimonio suficiente", es decir, valorar si el ciudadano disfruta realmente de capacidad económica para

²¹ *Ídem*, párr. 35.

²² Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal, *doc, cit*, Directriz 1. párr, 41.

²³ Integrará una unidad familiar el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores (no emancipados). También se incluyen las parejas de hecho. Artículo 4 del Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita.

²⁴ Él/ella y/o su pareja, o son autónomos cuyo nivel de ingresos se ha reducido drásticamente.

afrontar los costes de un proceso, tendría que definirse a partir de signos evidentes de riqueza que permitan concluir que se dispone de liquidez suficiente (por ejemplo, tener una segunda vivienda – si está amortizada-, un vehículo de alta gama, o ser titular de valores o productos financieros).

En cuanto a la vara de medir los ingresos no será ya sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) sino sobre algo que se llama ‘Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples’ (IPREM)²⁵, sobre cuyo impacto no hay ningún estudio desde que se creó que permita valorar si resulta más proporcionado y justo que los cálculos a partir del SMI²⁶.

Según el criterio actual el umbral en **importes anuales** para acceder a la justicia gratuita es, para todos, el de dos veces el SMI (es decir, 14.910,28 euros). Con el Proyecto de Ley se diferencian los umbrales en función de los miembros de la unidad familiar de manera que las **personas no integradas en una unidad familiar no tendrán derecho a la justicia gratuita si sus recursos económicos son superiores a dos veces el IPREM** (es decir, 12.780,00 euros). Para las unidades familiares con dos o tres miembros el umbral de acceso será el de dos veces y media el IPREM (es decir, 15.975,33 euros); y en las familias de cuatro o más miembros la referencia será el triple del IPREM (es decir, 19.170,39 euros). En casos de **circunstancias familiares especiales**²⁷, el **límite para poder acceder a la justicia gratuita se eleva** de cuatro veces el SMI (es decir, 29.821 euros) a cinco veces el IPREM (es decir, 31.950,65).

Si hablamos de **importes mensuales**, en aquellos casos en los que el solicitante no forme parte de una unidad familiar, el umbral de referencia será dos veces el IPREM (1.065,00 euros); dos veces y media el IPREM (1.331,28 euros) para las unidades con dos o tres miembros; y en las familias de cuatro o más miembros la referencia es el triple del IPREM (1.597,53 euros); 2.662,55 euros en los casos especiales que apuntábamos arriba. Con la ley vigente, salvo para los casos de circunstancias especiales, el umbral para todos era de 1.242,52 euros.

	Ley actual		Proyecto de Ley	
	Mensual (SMI)	Anual (SMI)	Mensual (IPREM)	Anual (IPREM)
Soltero	1.242,52€	14.910,28€	1.065,00 €	12.780,00 €
Unidad familiar (2 ó 3)	1.242,52€	14.910,28€	1.331,28 €	15.975,33 €
Unidad familiar (4 o más)	1.242,52€	14.910,28€	1.597,53 €	19.170,39 €
Familias con circunstancias especiales	1.242,52€	14.910,28€	2.662,55 €	31.950,65€

²⁵ **Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples** creado por el Real Decreto-Ley 3/2004 de 25 de junio “para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía”.

²⁶ El Consejo de Estado ha hecho llamada de atención a este respecto en su dictamen de 19 de diciembre de 2013 sobre el Anteproyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita.

²⁷ Ya sean de salud o de discapacidad, o familias numerosas por ejemplo, aunque no están perfiladas con la consiguiente inseguridad jurídica.

Tanto en la regulación actual como en el Proyecto de Ley se hace **abstracción del mayor o menor nivel de gastos que el ciudadano en cuestión afronte**. No se hacen cálculos de los ingresos y gastos, sino que sólo se **atiende al nivel de renta en términos brutos**. El sistema, por tanto, no parece justo pues, ante idénticos ingresos, no todos los ciudadanos necesitan afrontar los mismos gastos, y estos pueden mermar considerablemente su capacidad económica real para poder afrontar o no los costes de un proceso.

Los nuevos baremos **perjudican especialmente** a las unidades familiares con una sola persona (solteros, sin hijos) pues si antes se requería (para todos) como hemos visto un umbral de 14.910 euros anuales, ahora se reduce para ellos a 12.780 euros. Es desproporcionado, por ejemplo, con relación a las unidades familiares de dos a cuatro miembros, para quienes la subida del umbral es de apenas 80 euros mensuales.

De esta manera, un ciudadano soltero o sin hijos, si ingresa al año más 12.780,00 euros brutos, quedará automáticamente excluido del acceso a la justicia gratuita, tenga gastos parcos o tenga que afrontar el pago de alquiler, o de hipoteca, o de letras de un coche, o de estudios, o gastos médicos importantes, o ayudar económicamente a padres o hermanos, por ejemplo (situación ésta, por cierto, predicable de cualquier tipo de unidad familiar). Incluso no llegando a los 12.780 euros anuales de ingresos, si tiene alguna propiedad (más allá de su vivienda habitual) también quedará fuera; si necesita asistencia jurídica pero supera ese umbral y/o tiene patrimonio tendrá que costeársela. En suma, puesto que la **condición relativa a los medios de vida se basa sólo en un cálculo de los ingresos** de la unidad familiar, se pueden presentar situaciones injustas.

Por ello los Principios y directrices de la ONU recuerdan que en tales casos, cuando los miembros de la familia están en conflicto entre sí (esto sí lo prevé el Proyecto de Ley) **o no tienen un acceso equitativo a ese ingreso**, se utilice para la aplicación del beneficio solamente el ingreso de la persona que solicite la asistencia jurídica gratuita²⁸. Ello no es una cuestión baladí porque si, digamos, el solicitante no puede disponer en modo alguno de los ingresos de su pareja por la razón que fuere, se le estarían computando unos ingresos indisponibles a los efectos de solicitar la justicia gratuita.

En definitiva, los criterios establecidos en el Proyecto de Ley llevarán indefectiblemente a la **exclusión de la asistencia jurídica gratuita** a personas cuyos recursos van a superar los umbrales establecidos pero cuyas necesidades vitales y su situación patrimonial real les impedirá costearse los servicios de un abogado y, en su caso, gastos de procurador, pago de tasas judiciales y otros costos de un proceso. Ello **supondrá un obstáculo al acceso a la justicia** porque todos aquellos

Proyecto de Ley:

- *Los umbrales sólo atienden al nivel de renta en términos brutos.*
- *Se dificulta especialmente el acceso a la justicia gratuita a solteros sin hijos.*
- *El ciudadano extranjero no comunitario que se encuentra de forma irregular en España queda excluido como posible beneficiario.*

²⁸ Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal, *op. cit.*, Directriz 1. f).

ciudadanos que superen esos umbrales -pero que, en realidad, no tengan capacidad económica para afrontar los gastos de un proceso- tendrán que renunciar, por ejemplo, a presentar una demanda de separación o a reclamar el cobro de una deuda.

2.2. Justicia gratuita para (algunas) víctimas, y para (algunos) colectivos. Discriminación

Antes de abordar esta cuestión hacemos una llamada de atención sobre una carencia del Proyecto de Ley relativa a las personas a las que puede ser aplicable la asistencia jurídica gratuita. ¿Qué pasa con el ciudadano extranjero (de un Estado que no sea miembro de la UE) que se encuentra de forma irregular en España? El artículo 2 del Proyecto de Ley lo excluye como posible beneficiario. También a su respecto existe un deber positivo del Estado de proporcionar asistencia jurídica. ¿Verán denegada su solicitud de acceso a la justicia gratuita porque no están incluidos en el ámbito personal de aplicación y/o porque no se puede disponer de datos económicos suyos que permitan evaluar su carencia de recursos? Si finalmente se deniega la solicitud pero la asistencia jurídica hubiera sido ya prestada entretanto, el abogado que la hubiera prestado no percibiría remuneración por el servicio, ni por parte del cliente ni por parte del sistema de justicia gratuita.

Así pues, según el texto del Proyecto, el extranjero que se encuentra en forma irregular no podría disponer de asistencia jurídica (gratuita) para impugnar, por ejemplo, una orden de expulsión, o para cuestionar unas medidas paterno-filiales, o para reclamar en vía laboral. Y el perjuicio no será sólo para él, también para el profesional (abogado) que haya anticipado –sólo previsible en vía penal- la prestación de un servicio que finalmente no sería remunerado porque la persona a la que ha asistido finalmente no tiene acceso a la justicia gratuita.

Dicho lo cuál, veamos la novedad que trae el Proyecto de Ley en cuanto a justicia gratuita para algunas víctimas y determinados colectivos²⁹.

El Proyecto de Ley extiende el derecho a la justicia gratuita, **sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos económicos**, a determinadas víctimas: por ejemplo, las de violencia de género, de trata de seres humanos, de terrorismo, o de accidentes graves con secuelas permanentes, así como a menores o discapacitados objeto de abusos o maltratos. Ello, siempre y cuando el proceso esté vinculado a su condición de víctima. Las víctimas tendrán derecho al asesoramiento previo y a atención jurídica especializada cuando interpongan una denuncia. Los menores y las personas con discapacidad contarán con asistencia pericial especializada.

Esta medida, según el Proyecto de Ley, dice atender a las recomendaciones marcadas por la Directiva 2012/29/EU sobre estándares mínimos de derechos, apoyo y protección de las víctimas de delito³⁰. También se menciona la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de

²⁹ En febrero de 2013 el Gobierno aprobó un Decreto ley por el que modificaba la ley de tasas judiciales anticipando algunos puntos de la Justicia Gratuita en cuanto a estos nuevos beneficiarios (víctimas de violencia de género, de trata de seres humanos, de terrorismo, o de accidentes graves, así como menores o discapacitados objeto de abusos o maltrato).

³⁰ Directiva 2012/29/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 que establece los estándares mínimos de derechos, apoyo y protección de las víctimas de delito y que sustituye la Decisión Marco 2001/220/JHA.

las víctimas, y la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procesos relativos a la orden de detención europea.

Siendo así, y porque parece que son Directivas europeas las que iluminan esta concesión del derecho a la justicia gratuita a determinadas víctimas y colectivos, digamos que la medida adoptada para garantizar los derechos recogidos en ellas sería insuficiente e incompleta. Porque lo que dice la reseñada Directiva sobre estándares mínimos de derechos, apoyo y protección de las víctimas de delito es que:

Artículo 13 (Derecho a justicia gratuita):

*“Los Estados miembros **garantizarán a las víctimas** [a todas las víctimas de un delito] **el acceso a asistencia jurídica gratuita cuando tengan el estatuto de parte en el proceso penal**. Las condiciones o normas procesales en virtud de las cuales las víctimas tendrán acceso a la asistencia jurídica gratuita se determinarán en el Derecho nacional.”*

Y,

Artículo 14 (Derecho al reembolso de gastos):

*“Los Estados miembros **brindarán a las víctimas** [a todas ellas] **que participen en procesos penales** la posibilidad de que se les reembolsen los gastos que hayan afrontado por su participación activa en dichos procesos penales, de acuerdo con su estatuto en el sistema de justicia penal pertinente. Las condiciones o normas procesales en virtud de las cuales las víctimas podrán recibir el reembolso se determinarán en el Derecho nacional.”*

Directiva sobre derechos, apoyo y protección de las víctimas de delito:

- *Se refiere a todas las víctimas con estatuto de víctimas en el proceso penal.*
- *Establece que los Estados deben garantizar a todas estas víctimas el acceso a asistencia jurídica gratuita.*
- *El Proyecto de Ley asegura este derecho sólo para las víctimas de determinados delitos.*

Es decir, la Directiva habla de **todas las “víctimas”**, con “estatuto de víctimas” en el proceso, a las que el Estado garantizará el acceso a la justicia gratuita, y **no por tanto de sólo aquellas que los gobiernos decidan a su criterio**. Una de dos; o se aplica la exención de acreditar la insuficiencia de medios económicos que habilite la asistencia jurídica gratuita a todas las personas con estatus de víctima en el proceso (cualquiera que sea el delito), o se pide a todas con carácter previo que evidencien su situación de insuficiencia económica para litigar. De lo contrario, se está privilegiando (discriminando) a unas víctimas frente a otras. Las señaladas en el Proyecto de Ley no disponen *per se* de más y mejor derecho a la justicia gratuita (dispongan o no de recursos económicos) que la víctimas del resto de delitos.

*“Sin perjuicio ni contradicción de los derechos del acusado, los Estados deben, cuando sea el caso, prestar asistencia jurídica a las víctimas de delitos”*³¹ y, los Estados deben, cuando sea el caso, adoptar medidas adecuadas para asegurarse de que *“a lo largo de todo el proceso de justicia penal se preste a las víctimas de delitos asesoramiento, asistencia, atención, servicios y apoyo adecuados, a fin de prevenir la victimización repetida y la victimización secundaria”*³². No hay, pues, diferencia entre víctimas, según cuál fuere el delito, para recibir la debida asistencia jurídica.

Si una víctima de violencia de género o de terrorismo (por mencionar a algunas de las incluidas) dispone de recursos económicos para afrontar los costes de su asistencia jurídica ¿por qué el Estado se la ha de proporcionar gratuitamente en detrimento de una víctima de un crimen de lesa humanidad o de un delito de estafa, por ejemplo? No puede haber a estos efectos distintas desigualdad de trato en función del delito.

Por demás, no se entiende, porque no se explica (sólo se dice en la Exposición de Motivos que “por su importancia”), por qué –aparte del listado de víctimas que decíamos- se amplía el derecho de acceso a la justicia gratuita sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos para litigar a determinados y concretos colectivos (personas jurídicas). Se trataría de asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo, o de personas con discapacidad, Cruz Roja Española, asociaciones de consumidores y usuarios (en el orden jurisdiccional social y contencioso administrativo), sindicatos para ejercicio de un interés colectivo en defensa de los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social.

Por tres motivos no se explica: porque si lo que pretende el Proyecto de Ley es implantar adecuadamente la ya citada Directiva sobre víctimas, los mencionados colectivos no ostentan tal condición; en segundo lugar, porque si de lo que se trata es de apoyar la acción de entidades que defienden intereses de víctimas y de perjudicados ¿qué pasa, por ejemplo, con las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos humanos que buscan litigar en pro de las víctimas de crímenes internacionales y abusos de las autoridades? ¿O con las que defienden, por ejemplo, los intereses de asilados y refugiados? Y, finalmente, si a las entidades que se les está confiriendo sin más el derecho a la justicia gratuita disponen de recursos económicos suficientes para afrontar los gastos de un determinado proceso, ¿no supone ello una perversión del principio de igualdad de armas? Se estaría “privilegiando” (por “su importancia”, se dice) a personas o grupos de personas de forma arbitraria y desigual cuando pudiera ser que no se encuentran en situación de insuficiencia económica para litigar.

El derecho “prestacional” que constituye la asistencia jurídica gratuita debe y necesita tener como ámbito natural de aplicación el de las personas físicas carentes de recursos económicos para proporcionársela. Bienvenida la posibilidad de extenderla a personas jurídicas (de forma igual), pero siempre que acrediten su imposibilidad económica de afrontar los costes de su asistencia jurídica, tengan más “importancia” o no, a criterio del Gobierno.

³¹ Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal, *doc. cit.*, Principio 4, párr. 24. Asistencia jurídica a las víctimas de delitos.

³² *Idem*, Directriz 7, párr. 48. Asistencia jurídica a las víctimas.

2.3. Más dificultades para los abogados

El Proyecto de Ley trae más trabajo y más trabas para los Colegios de Abogados y para los profesionales. El régimen proyectado hace recaer sobre los Colegios de Abogados el grueso de las tareas relacionadas con la comprobación de los datos económicos del solicitante del beneficio de justicia gratuita exigiendo además que todo ello se haga bajo plazos perentorios, so pena, para el abogado, de tener que asumir el coste de los servicios provisionalmente prestados.

Tampoco parece aconsejable poner en manos de los colegios (que deberían limitarse a canalizar las solicitudes presentadas) datos sensibles relativos a los solicitantes del beneficio de justicia gratuita porque ello incrementa el riesgo de que se produzcan accesos indebidos a datos personales.

Por demás se pone una carga excesiva sobre los colegios de abogados en cuanto a la gestión y tramitación de las solicitudes. Según el Proyecto de Ley se les atribuye las tareas de facilitar a los peticionarios la información necesaria sobre el cumplimiento de los requisitos para su concesión, así como el auxilio en la redacción de las solicitudes, el informar del contenido material del derecho, de su extensión temporal y del coste del servicio que se les presta, así como de las obligaciones que deberán asumir en caso de que no se les reconozca definitivamente su derecho y de los sistemas alternativos al proceso judicial para la resolución de los conflictos, cuando tales sistemas pudieran resultar de aplicación.

Si la **justicia gratuita es un derecho prestacional que debe asegurar el Estado** es éste, y no los colegios de abogados, quien **debe asumir todas esas tareas**.

También parece cuestionable que se atribuya a los Colegios de Abogados la función de reconocer y poner en conocimiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita las situaciones de abuso de derecho que detecten, así como la forma en la que se define el prototipo de situación que puede ser considerada como de abuso³³. Esto es tan vago e indeterminado que lleva a la inseguridad jurídica. No se establece canon alguno para que los Colegios dispongan de bases objetivas para calibrar si un ciudadano busca pleitear de manera injustificada y sistemática.

Algo como esto no constituye sino **trabas al acceso a la justicia gratuita y cuya carga de control se está atribuyendo a los Colegios de Abogados**. Pero los Estados tienen obligaciones positivas cuya atención no pueden hacer recaer en determinados colectivos. Son los Estados quienes:

El Proyecto de Ley:

- *pone excesiva carga sobre los colegios de abogados respecto de tareas que debería asegurar el Estado.*
- *El problema de la deslocalización de abogados traerá más retrasos e inseguridad.*
- *No se especifica como sería el nuevo proceso de designación.*

³³ Por ejemplo, el supuesto de una persona que recurre *sistemáticamente* al beneficio de justicia gratuita para pleitear *de manera injustificada*.

*“deben velar por que se establezcan mecanismos para seguir de cerca, vigilar y evaluar la asistencia jurídica y deben esforzarse continuamente por mejorar la prestación de esa asistencia. A tal fin, los Estados pueden adoptar medidas para: a) **Realizar actividades regulares de investigación y reunión de datos** desglosados por sexo, edad, situación socioeconómica y distribución geográfica de los beneficiarios de la asistencia jurídica, y publicar las conclusiones de esas investigaciones; b) **Dar a conocer las buenas prácticas en la prestación de asistencia jurídica**; c) **Vigilar la prestación eficiente y eficaz de la asistencia jurídica**, en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos; d) **Impartir a los proveedores de asistencia jurídica capacitación intercultural, culturalmente apropiada, sensible a las cuestiones de género y adecuada a las diversas edades**; e) **Mejorar la comunicación, coordinación y cooperación entre todos los organismos de justicia**, especialmente a nivel local, para determinar los problemas locales y acordar soluciones que permitan mejorar la prestación de la asistencia jurídica”³⁴.*

Y lo que parece una disfunción -y que sin duda presentará serios problemas de funcionamiento- es que se exija como requisito indispensable para prestar el servicio que el Abogado y el Procurador, con independencia de su lugar de residencia o establecimiento, puedan personarse en la instancia judicial que corresponda sin demora injustificada y, en cualquier caso, dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo. *“Si en dicho plazo no compareciera, se designará un nuevo abogado o procurador que deberá comparecer a la mayor brevedad posible”³⁵*. Es decir, se suprime la obligación de residencia del abogado del Turno de Oficio en el ámbito de su domicilio profesional y de su Colegio de Abogados lo que **perjudicará la tutela judicial efectiva del ciudadano**.

Con el Proyecto de Ley, cualquier letrado de cualquier Colegio de Abogados del país podrá darse de alta en el Turno de Oficio, independientemente de cuál sea su domicilio profesional y su Colegio. Ello hará **materialmente imposible en muchos casos el cumplimiento de tan perentorio plazo de tres horas** (muy especialmente en el caso de asistencia a detenidos), lo que redundará en inevitables retrasos en la asistencia. El proyecto de Ley, en lugar de ofrecer nuevas ventajas al ciudadano, lo que hace es perjudicar el actual sistema de prestación del servicio.

Según la ley vigente, de 1996, se establece un plazo de ocho horas. Huelga decir que los propios abogados siempre han ido consiguiendo rebajar ese plazo a fin de poder prestar el servicio a la mayor brevedad posible, pero exigir con carácter indispensable la presencia en tres horas presentará enormes dificultades. Si, por poner un ejemplo, el letrado reside y está colegiado en Málaga y debe asistir a un detenido en Madrid, ¿cómo podría acudir a prestar la asistencia en tres horas? Y si no puede llegar a tiempo, ¿quién y cómo se designa a cuál otro abogado? El Proyecto de Ley no especifica ni detalla como sería este proceso de nueva designación por lo que, en la práctica, en lugar de acelerar, retrasaría más, en vez de acelerar, el acceso al pronto al servicio.

Los Colegios de Abogados disponen ahora mismo de sistemas bien organizados para gestionar el reparto de asuntos en función de la especialidad. Los abogados acuden a las asistencias que se les designan tan pronto como pueden pero la “deslocalización” que propone el Proyecto de Ley exigirá

³⁴ Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal, *doc. cit.*, Directriz 17.

³⁵ Artículo 25 del Proyecto de Ley.

esfuerzos ímprobos. Si lo que se desea y se pretende es más inmediatez habría que articular más medios humanos y económicos. El Proyecto de Ley dice que si el letrado designado no llega, se nombra a otro: ¿quién lo nombra, con qué medios y en qué plazos?

Teniendo presentes los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, en particular el Principio 6, en el que se establece que todas las personas, *“cuando no dispongan de abogado, tendrán derecho, siempre que el interés de la justicia así lo demande, a que se les asignen abogados con la experiencia y competencia que requiera el tipo de delito de que se trate a fin de que les presten asistencia jurídica eficaz y gratuita si carecen de medios suficientes para pagar sus servicios”*³⁶, que se nos diga quien va a nombrar y a formar en cada especialidad a esos “otros” abogados que habría que nombrar cuando no haya letrado designado para acudir en menos de tres horas. ¿Lo va a hacer la Administración? En este caso ¿cómo? Según los Principios y directrices de la ONU establecen que *“los Estados deben velar por que los profesionales que trabajen en el sistema de asistencia jurídica nacional posean las cualificaciones y la capacitación adecuadas para los servicios que prestan”*³⁷.

Debe reconsiderarse, en general, la excesiva carga y responsabilidad que se hace recaer en los Colegios de Abogados y en los abogados. También debe replantearse seriamente el problema de la deslocalización de los abogados a la hora de prestar el servicio y debe considerarse la necesidad de apoyar programas de formación. O se mantiene el sistema vigente o se amplían las dotaciones presupuestarias para que los Colegios de Abogados puedan disponer en los servicios de asistencia de más letrados.

3. Conclusión

Los Estados deben considerar la **prestación de la asistencia jurídica como un deber y una responsabilidad**. Deben velar por un **sistema de asistencia jurídica completo y eficaz así como asignar al sistema los recursos humanos y financieros necesarios**.

España es un país mal dotado económicamente para sufragar los costes de la asistencia jurídica gratuita, necesariamente concebida como elemento esencial para asegurar el acceso a la justicia. La realidad es clara: sólo un 2,28 % de los 1.507 millones aprobados en los Presupuestos Generales del Estado para Justicia, para el año 2014, van destinados a la Asistencia Jurídica Gratuita. Se desconoce el destino de las tasas judiciales implantadas (que, se supone, iban destinadas a sufragar precisamente la justicia gratuita).

Son razones económicas de “ahorro” las que sin duda imprimen los criterios del Proyecto de Ley a la hora de modificar los umbrales de ingresos para acceder al derecho y dejando en la indeterminación lo que se entenderá por patrimonio suficiente para poder acceder o no a la justicia

³⁶ Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990: informe preparado por la Secretaría (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.91.IV.2), Cáp. I, sección. B.3, anexo.

³⁷ Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal, *doc. cit.*, Directriz 13, párr. 64.

gratuita. Se diga lo que se diga, se trata en definitiva de que menos personas puedan acceder a ese derecho.

Acuciado por la normativa europea, el Gobierno decide extender el beneficio, sin necesidad de acreditar la insuficiencia de recursos económicos, a determinadas víctimas e incluso colectivos (personas jurídicas) pero lo hace sin criterio y de forma discriminatoria respecto del resto de víctimas.

Con el Proyecto de Ley los abogados y los Colegios de Abogados verán complicarse la prestación de la asistencia jurídica gratuita. Se pide mayor disponibilidad con los mismos medios, más trabajo y responsabilidad en la comprobación de los datos económicos de los posibles beneficiarios y en la detección de posibles abusos de derecho. Más burocracia y, en definitiva, más trabas incluso para el cobro de los servicios prestados.